

ABC

Televisión y sociedad

EN la sociedad moderna, la televisión se ha erigido en un instrumento de poder no siempre al servicio de los ciudadanos sino, muchas veces, al de intereses políticos, que serían legítimos siempre que la financiación, presupuestaria o comercial, respete las reglas del libre mercado y en sus contenidos no se incluya la propaganda partidista, el sensacionalismo o la basura. Cuando, a finales de los años sesenta, Marshall McLuhan dio a conocer su obra «La Galaxia Gutenberg» estaba lejos de atisbar el impacto público que, tres décadas después, iban a tener los medios de comunicación audiovisuales, aunque resumió su inquietud ante la potencialidad de la imagen en su conocida idea de «El medio es el mensaje».

La televisión fue, en sus comienzos, un intento de «informar, formar y entretener». Pero se convirtió pronto en un medio acaparador que no siempre respeta las reglas del juego frente al resto de los medios. El caso concreto español es el que nos mueve hoy a una reflexión más reposada que la de la candente actualidad. Nuestro país aún no ha superado el nivel de lectura de periódicos y revistas que alcanzó en la década de los años treinta. Las penurias de la posguerra y el desarrollismo desembocaron en que una buena parte de la población encontrara que la televisión, como medio, le aportaba gratuitamente lo que la prensa escrita le proporcionaba de forma onerosa. Por eso el fulminante desarrollo de ese medio en nuestro país ha planteado serios pro-

blemas, tanto de competitividad como de contenidos y de costes sociales.

La entrada de las emisoras autonómicas y privadas, primero, y las de pago, después, no se aprovecharon para establecer los límites de esa competitividad. La posibilidad de entrada de nuevos operadores de televisión en la modalidad digital en sustitución de la analógica es, ahora, una apuesta por una tecnología de vanguardia pero también la fórmula que permite mayor calidad de transmisión, mejor aprovechamiento del ancho de banda y mayor velocidad de transmisión. La programación a la carta y el «pago por visión» vienen a resolver, de un modo asequible para una mayoría de los ciudadanos, los problemas de la libertad de elección y saturación publicitaria, una práctica, esta, a la que se unen oscuros acuerdos de coincidencia horaria en las cadenas y la práctica del «dumping» mediante la cual se abarata el precio unitario de un «spot» por el procedimiento de emitir otro u otros con carácter gratuito.

España se enfrenta al reto de actualizar su legislación sobre telecomunicaciones adaptando sus normas a la directiva comunitaria conocida como Televisión sin Fron-

teras. Entre otras cosas, esta directiva establece los límites para evitar la saturación de anuncios y la invasión e inadvertencia de contenidos violentos y sexuales en la programación en determinadas franjas horarias. La oportunidad de acelerar esta adaptación no debería ser desaprovechada porque resulta cada día más necesaria la clarificación del modelo de televisiones públicas estatales y autonómicas de acuerdo con el criterio anunciado en el protocolo anexo del tratado de Amsterdam, criterio que pretende evitar la vulneración del principio de libre y leal competencia y que pone en entredicho el modelo actual de doble y hasta triple financiación de las televisiones públicas por medio de la publicidad, los Presupuestos Generales del Estado y las ayudas autonómicas disfrazadas de créditos, subvenciones o publireportajes.

Los costes de producción propia de TVE, por ejemplo, han llegado a ser siete veces superiores a los de producciones ajenas; la plantilla sigue estando ampliamente infratilitada, el endeudamiento supera los 600.000 millones de pesetas. La solución no está en aumentar los ingresos publicitarios como sus responsables acaban de anunciar. Y algo semejante ocurre en las televisiones autonómicas. La situación obliga a un replanteamiento general. Ni el medio debe ser el mensaje, ni el mensaje puede ser sólo el del poder de los propietarios, el de los programadores o el de los anunciantes; el medio y el mensaje deben estar al servicio del conjunto de la sociedad.

El PP en Extremadura

EL retroceso electoral de Juan Ignacio Barrero en el Congreso regional confirma las dificultades que atraviesa el Partido Popular en Extremadura. La prolongada hegemonía socialista de la mano, un tanto populista, de Rodríguez Ibarra y las dificultades de liderazgo del presidente regional justifican el surgimiento de una alternativa, encabezada por Pedro Acedo y apoyada, entre otros, por Luis Ramallo, que, aunque derrotada, ha obtenido unos buenos resultados que pueden exhibir casi como una victoria moral. Pero del Congreso de ayer queda abierta una herida que puede degenerar en una grave crisis. El ascenso de la oposición interna ha venido precedido del frustrado intento de la dirección regional de anular la candidatura rival. Existe un enfrentamiento personal, pero también algo más: el malestar derivado de la frustración ante la solidez electoral del PSOE extremeño. La voluntad de los compromisarios de confirmar a Barrero en la Presidencia regional no disipa las crecientes dudas que existen sobre la idoneidad del ex presidente del Senado para dirigir el partido en Extremadura y para hacer frente con posibilidades de éxito a la hegemonía socialista en la región.



PRESIDENTE DE HONOR

GUILLERMO LUCA DE TENA

PRESIDENTE

NEMESIO FERNÁNDEZ-CUESTA

EDITORA

CATALINA LUCA DE TENA

DIRECTOR

JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

SUBDIRECTORES: Santiago Castelo, Ángel-Antonio González, Emilio Contreras, José Alejandro Vara, José Luis González-Besada, José Antonio Álvarez-Gundín

JEFES DE REDACCIÓN: C. Maribona, R. Gutiérrez, V. A. Pérez, (Continuidad), A. Fernández, J. A. Navas (Economía), J. García Calero (Cultura), S. Gujarrar (Nacional), A. Laso D' Tom (Madrid), E. Ortego (Deportes), L. I. Parada (Opinión), R. Pérez-Maura (Internacional), A. Puerta (Sociedad), F. Rubio (Ilustración)

SECCIONES: J. M. Fdez. Rúa (Ciencia), E. Rodríguez Marchante (Cine), F. Álvarez (Comunicación), R. Rey, J. Espejo (Confeción), P. Durán (Continuidad), N. Pulido (Cultura), J. C. Díez (Deportes), A. G. Moreno (Economía), J. González (Gráfica), M. Asenjo (Educación), T. H. Demichel (Espectáculos), B. Cortázar (Gente), J. García, J. Romeu (Fotografía), M. Salvatierra (Internacional), G. Muñoz (Madrid), A. Collado (Nacional), A. Martínez Fornés (Sanidad), J. Fernández-Cuesta, M. I. Serrano (Sociedad), R. Domínguez (Sucesos), M. Tourón (Televisión), V. Zabala de la Serna (Toros), M. Paral (Tribunales)

PRENSA ESPAÑOLA, S. A.

CONSEJERO DELEGADO

JESÚS FERNÁNDEZ-MIRANDA

DIRECTOR GENERAL

JOSÉ MANUEL MURIEL

DIRECTORES: C. Conde (Personal), J. Quesada (Publicidad), J. M. Cea (Financiero), A. de Onís (Logística y Aprovisionamiento), A. Domenech (Comercial), S. Salmerón (Desarrollo), M. G. Garzón (Técnico y Producción).

Fisura en el PNV

LA fisura ideológica y estratégica en el seno del PNV se ahonda. La antitesis entre Arzalluz y Ardanza no se supera en la síntesis de Ibarreche. Mientras el ex *lendakari* adopta la línea moderada, reivindica una estrategia no vinculada a EH, minimiza la eficacia de la Asamblea de Municipios y no olvida al 45 por ciento de vascos no nacionalistas, Arzalluz se ha visto obligado a defender, en el Día del Partido, la unidad y el respeto a la dirección. Mala cosa es tener que reivindicar la unidad, pues sólo se reclama cuando se ha perdido. El PNV enfrenta el compromiso de las próximas elecciones generales con una profunda herida abierta. No se puede servir a la vez a la legalidad constitucional y a Estella. No se pueden exhibir credenciales democráticas y, a la vez, caminar codo con codo con los antidemócratas. Entre la lealtad y la deslealtad constitucional no existe una tercera vía ni un punto equidistante. Entre la legalidad y la acción directa ilegítima no hay un camino intermedio. Ese es el dilema que el PNV debe resolver, en beneficio de su propia coherencia y de los derechos de sus militantes y electores. Un partido democrático con vocación de gobierno no puede dudar ante esta alternativa.

ABC

Director Adjunto: Eduardo Sarri Harin

Subdirectores: Santiago Castela, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lalluente, Juan María Castasa

Jefes de área: Iñaki González (Opinión), Alberto Pérez (Nacional), Miguel Salvatierra (Internacional), Maite Alcaraz (Sociedad-Cultura), Angel Lasu (Economía), Pablo Flores (Reportajes-corresponsal político), Jesús Aycart (Arte)

Adjunto al director: Ramón Pérez-Maura

PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA

PRESIDENTA-EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA

CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA

DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Gujardo (Continuado), A. Collado (Nacional), F. Coates (Economía), A. Puerta (Regiones), I. Fernández-Casta (Sociedad), A. García (Madrid), J. G. Calvo (Cultura), E. Ortega (Deportes), F. Álvarez (TV-Comunicación), L. del Álamo (Diseño), J. Buzco (Fotografía), F. Rufao (Ilustración)

Director General: Néstor Casado

Económico-financiero: José María Cea Comercial; Laura Múgica
Producción y sistemas: Ignacio Sanz

LA HORA DEL ESTADO

EL Gobierno vasco ha cruzado definitivamente el umbral de la confrontación con el Estado al aprobar el proyecto de Estatuto Político de la Comunidad de Euzkadi y presentarlo después en el Parlamento de Vitoria. Es la culminación de un objetivo diseñado en el acuerdo del PNV y EA con ETA en 1998, cuando pactaron impulsar un proceso político basado en la autodeterminación, la territorialidad, el ámbito vasco de decisión y la exclusión de los no nacionalistas. Desde entonces sólo han variado las dosis de protagonismo de PNV y ETA, pero no los objetivos comunes. Si en 1998 era la banda terrorista la que marcaba la pauta, ahora es el PNV el que maneja el espacio político de la banda terrorista. La variación de piezas no ha alterado el resultado final, que se muestra con toda claridad en un proyecto de ley flagrantemente inconstitucional, camuflado por un discurso mendaz del lendakari y abocado a recibir una respuesta contundente del Gobierno central. La declaración institucional leída al término del Consejo de Ministros no ofrece dudas al nacionalismo vasco ni a la sociedad vasca sobre las premisas de esa respuesta. Un proyecto que, como afirma el Gobierno, legitima el terrorismo de ETA, rompe el pacto constitucional y estatutario, enfrenta a los vascos entre sí, atenta contra la tradición foral de los Territorios Históricos y hurta al pueblo español su condición de titular exclusivo de la soberanía nacional, sólo puede ser sometido a la máxima oposición política, social y jurídica. El nacionalismo ha abierto un tiempo de confrontación sin concesiones, despreciando la infinita paciencia y generosidad de la sociedad española, demostrada en la amnistía de 1977, la Constitución de 1978, el Estatuto y el Concerto Económico. Y los casi mil muertos causados por una ETA que, desde ayer, tiene motivos para pensar, gracias al lendakari, que su terrorismo ha servido para algo.

El texto aprobado por el Gobierno vasco co-

incide de forma casi literal con el publicado por ABC en el mes de julio pasado. Entonces y ahora se trata de un proyecto de corte constituyente, que pretende crear un ente estatal soberano que decide asociarse a España. No es un proyecto de reforma del Estatuto de Gernika, porque lo deroga íntegramente. Tampoco es un proyecto estatutario, pues rompe el modelo de la Constitución. La propuesta del lendakari se basa en la desaparición de la Comunidad Autónoma Vasca y su reemplazo por una entidad paraestatal vinculada a España por relación confederal revocable por decisión del pueblo vasco. Si hay una propuesta de independencia, porque nadie se asocia libremente a lo que ya pertenece; si hay una propuesta de ruptura, porque la Constitución queda derogada en el País Vasco; si hay una propuesta de soberanía, porque el Gobierno, el Parlamento y la Justicia se regulan como poderes absolutos en la nueva Comunidad de Euzkadi. Como punto de partida, se declara la existencia de un Pueblo Vasco como sujeto jurídico, político e histórico, superior y ajeno a los ciudadanos que lo integran. Lo que da al nacionalismo vasco el dudoso mérito de recuperar en el siglo XXI las teorías organicistas de los peores nacionalismos europeos.

CON estas premisas no hay negociación posible. Ni cabe pensar que el PNV la desee. La «socialización» de la superación del Estatuto, como argumento motriz de este plan rupturista, se puso en práctica durante un año, con numerosas comparecencias ante la Comisión de Autogobierno del Parlamento de Vitoria y en la ronda de conversaciones del lendakari. Pura apariencia de diálogo. No hay en el proyecto de ley presentado ante el Parlamento rastro alguno que identifique a los ciudadanos vascos no nacionalistas, a los empresarios, a los sindicatos de ámbito nacional, a los movimientos sociales y a las vícti-

mas. Todos éstos han dialogado con el lendakari y ya se ve cuál ha sido el resultado: un proyecto alimentado por el afán de hegemonía de los nacionalistas y por el deseo de rentabilizar la decadencia de ETA antes de su derrota definitiva.

Nadie situado fuera del nacionalismo vasco puede pedir al Gobierno y a las instituciones del Estado que no respondan a la agresión nacionalista. No es suficiente consolarse con la seguridad de que el proyecto será finalmente un fracaso, porque en el trayecto que media hasta ese fracaso habrá que aplicar la ley, movilizar a la sociedad y ofrecer alternativas políticas. La prudencia y la oportunidad deben regir la respuesta, pero también el principio de autoridad y la confianza de los ciudadanos en la superioridad de la Constitución y de sus instituciones, que se deben hacer valer en cada eslabón de esta cadena de desafíos que el nacionalismo ha hecho irreversible con la implicación del Parlamento vasco. Por lo pronto, será necesario valorar la decisión de la Mesa de la Cámara de Vitoria sobre la calificación del proyecto de ley. El informe de los expertos que trabajaron para el lendakari —publicado también por ABC— decía que era necesario falsear la realidad y decir que se trataba de una reforma estatutaria, única manera de encauzar el proyecto por la vía legislativa del artículo 46 del Estatuto Vasco. Había que mentir, se ha mentido y se seguirá mintiendo, porque no es una reforma, ni es estatutaria, ni es constitucional.

EL objetivo previsto para la jornada de ayer, aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, no era otro que dejar claro, de la manera más hiriente posible, que para los nacionalistas la etapa estatutaria ha muerto. El Estado tendrá que hacerles ver que se han puesto a bailar sobre una tumba vacía.

HUELGA Y PENSIONES

ITALIA ha vuelto a vivir otra jornada de huelga por la proyectada reforma del sistema de pensiones. El Gobierno de Berlusconi, que ha sufrido ya tres huelgas, está dispuesto a modificar sustancialmente las actuales condiciones para tener derecho a una pensión pública. Es la forma, dice, de salvar al sistema de la quiebra. Propone aumentar el número de años necesarios de cotización para tener derecho a una pensión, de los 37 actuales hasta 40, y eleva de los 60 a los 65 años la edad mínima de jubilación para los hombres y a 60 para las mujeres. Además

incentiva con el 32,7 del salario el que se alargue la vida laboral cuando ya cumplan los requisitos para tener derecho al cobro de la pensión. Estas medidas han tenido una dura contestación por parte de los sindicatos italianos que han protagonizado una huelga, la segunda contra la reforma de las pensiones defendida por Berlusconi. Critican no haber buscado el consenso necesario para afrontar la reforma. Pero recuerdan que en muchos de los países en que se ha pactado la reforma de las pensiones, ésta se ha quedado a medio camino.

Protestas similares a la de Italia se han vivido en Alemania, que lleva adelante fuertes recortes del estado de bienestar, y en Francia, con proyectos que modifican las condiciones de protección social, nacidas en tiempos distintos, y que requieren adecuarse para salvaguardar el sistema. Este proceso imparable e ineludible de reforma también afecta a España. El consenso para acometer una reforma del Pacto de Toledo está en marcha. El pacto parece la mejor opción si además se logran las reformas necesarias.

La última oportunidad del PNV

Las urnas han hundido al nacionalismo vasco radical, lanzando a ETA y a HB un mensaje inequívoco de rechazo. El PNV ha sido el beneficiario principal de la bajada de la izquierda proetarra, alcanzando un respaldo electoral que al mismo tiempo que le vuelve a dar la opción de gobernar, le deja toda la responsabilidad de administrar el nacionalismo vasco. Al PNV se le han acabado las excusas para seguir culpando a los demás de su fracaso como gobernante. Porque como tal se ha de calificar el gobierno de veinte años que se salda con una fractura social sin precedentes y una discordia ciudadana que las elecciones de ayer no han resuelto. La legitimidad democrática de los resultados no esconde la complejidad de los códigos y criterios con que se ha guiado la sociedad vasca para decidir su futuro, pero resulta preocupante comprobar hasta dónde llega la impermeabilidad de sectores nacionalistas ante la crisis de toda índole provocada por sus dirigentes.

Desde hoy mismo, el PNV debe demostrar que ha entendido la gravedad del encargo recibido y decir a los ciudadanos vascos si su opción es la soberanía o el Estatuto, si llevará a las instituciones democráticas otra vez los principios de Estella o dará el paso de liderar con sentido común el abandono del aventurerismo soberanista. El problema es que el PNV no parte de cero en la respuesta y merece toda la desconfianza. Lo más probable y desolador es que sus dirigentes más dañinos se sentirán refrendados, que la disidencia interna quede barrida y que la ortodoxia partidista se imponga con mano de hierro. Sin sus críticos y sin la hipoteca de HB, el PNV se quita sus impurezas para reafirmarse en su sentido esencialista de la política vasca.

Sin embargo, la resolución de la alternativa entre soberanía o Estatuto no es inocua porque junto al nacionalismo se mantiene un sector de la sociedad vasca que ha hecho causa irrenunciable de la defensa de la Constitución y del Estatuto y que mantendrá su compromiso con una y otro si el nacionalismo aprovecha su mayoría para socavarlos. El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo que firmaron PP y PSOE en diciembre de 2000 sigue siendo una referencia irremplazable en la política vasca. Sus principios y compromisos nunca quedaron condicionados a un determinado resultado electoral, porque sellaban una defensa de la Constitución que ahora quizá más que nunca hay que sostener, especialmente frente a las tentaciones revisionistas de quienes, entre indiferentes y complacidos, ven en el resultado de ayer una confirmación de sus tesis sobre cómplices transversalismos con el PNV. Este partido, por el hecho de haber ganado las elecciones de ayer, no puede dar por borrada su nefasta experien-

cia de pactos y alianzas con ETA y HB, ni menos aún pensar que su victoria conlleva la deslegitimación de cualquier política que no sea la de volver a reconocerle patente de corso para gobernar. Si el nacionalismo radical se ha hundido ha sido por la desaparición de toda expectativa política para la violencia de ETA, algo que en nada se debe al PNV. Por eso, el voto de HB, el más radical, se ha ido al PNV, en la búsqueda de un terreno propicio para los objetivos soberanistas, en el que el terrorismo no actúe como una losa. Han sido la política de firmeza del Gobierno frente a ETA, la convergencia del PSOE con el PP en el Acuerdo de diciembre de 2000 y el respaldo de la sociedad española en su conjunto los que negaron la más mínima posibilidad de cesión a ETA y ayer recogieron el fruto de un rechazo social sin precedentes a la banda terrorista y a su entramado político.

HB sólo tendrá desde hoy las llaves —aquellas que con tanta arrogancia se atribuía Otegi— que el PNV quiera darle, porque si el PNV se lo propone, el nacionalismo radical puede quedar desde hoy recluido en la más absoluta marginación social, política e institucional, y este debería ser el objetivo prioritario del nuevo Gobierno

vasco. Por eso, el esfuerzo del constitucionalismo vasco no ha sido en balde. El País Vasco no es un terreno neutral para todos sus ciudadanos. Unos están libres y otros no. Unos pueden opinar, expresar y pensar sin temor y otros tienen miedo. Y esto es algo que ningún análisis debe olvidar, porque hacerlo, porque ignorar a los muertos, y todo lo que con ellos moría cada vez que ETA asesinaba, es escupir en sus tumbas.

Tampoco se ha podido superar la inercia de veinte años de hegemonía nacionalista, ejercida sobre las conciencias y las haciendas hasta límites tan poco sospechados que ayer, cuando la expectativa de cambio parecía probable, demostró su verdadera capacidad de presión. El nacionalismo nunca tuvo tanto miedo a perder y, por eso, nunca tuvo tanta necesidad de ganar. Pero, aunque parezca que nada ha cambiado, la tarea de normalizar al País Vasco ya ha comenzado con la derrota electoral de ETA y de HB, y es algo que sólo pueden reconocer como mérito propio las víctimas y los amenazados, los que se sobrepusieron al miedo para plantar cara a la violencia en las propias calles, en la Universidad, en los Ayuntamientos, allí donde hasta hace muy poco tiempo sólo había silencio y resignación. Ese esfuerzo heroico de miles de ciudadanos no merece ahora un catálogo de reproches por las expectativas frustradas ni un abandono a la resignación ni menos aún una variación acomodaticia en las relaciones con el nacionalismo.

El camino se ha hecho más largo pero ya ha quedado abierto y ni se va a cerrar ni las víctimas van a estar solas nunca más en su andadura. Este mensaje no debe ofrecerle duda al PNV. Cuando el nacionalismo tensó la cuerda de la convivencia y tentó la fuerza de la democracia al pactar con ETA y HB, calculó mal las resistencias de las instituciones y se encontró con un Estado que no cedió y con unas fuerzas políticas que se unieron ante la más grave de las agresiones contra la Constitución de 1978. Y así debe seguir siendo en el futuro. La responsabilidad del Gobierno y de los principales partidos políticos, PP y PSOE, es no ceder un palmo a las pretensiones nacionalistas que rompan el sistema constitucional y deberán oponer a ellas toda la fuerza que ese mismo sistema permita. Por encima de la legitimidad del voto al nacionalismo se sitúa la soberanía del pueblo español, expresada en la Constitución, y ningún acto ni estrategia que la socave deben ser consentidos. El PNV tiene en su mano conducir el gobierno de la Comunidad vasca por un camino de cordura o mantenerlo en la discordia permanente. Depende de que se proponga o no combatir a ETA hasta derrotarla. Nunca tendrá una oportunidad tan clara.



PRESIDENTE DE HONOR
GUILLERMO LUCA DE TENA

PRESIDENTE
NEMESIO FERNÁNDEZ-CUESTA

EDITORA
CATALINA LUCA DE TENA

DIRECTOR
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

DIRECTOR ADJUNTO: José Luis González-Besada

SUBDIRECTORES: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, José Antonio Álvarez-Gandini, José Alejandro Vara, Fernando R. Lafuente (Director de ABC Cultural)

JEFES DE REDACCIÓN: V. A. Pérez, A. Puerta (Continuidad), J. González (Opinión), S. Gujarró (Nacional), M. Salvatierra (Internacional), J. Fernández-Cuesta (Sociedad), J. G. Calero (Cultura), A. Laso (Economía), E. Ortego (Deportes), J. I. Garzón (Espectáculos), F. Álvarez (TV-Comunicación), A. Garrido (Madrid), L. del Álamo (Diseño), F. Rubio (Ilustración)

ADJUNTOS AL DIRECTOR: Ignacio Sánchez Cámara, Ramón Pérez-Maura, José Antonio Navas

SECCIONES: P. Durán, A. Moreno (Continuidad), A. Martínez (Opinión), A. Collado (Nacional), A. Pérez (Internacional), P. Muñoz (Sociedad), N. Pulido (Cultura), F. Cortés (Economía), J. C. Díez, J. M. Mata (Deportes), G. Muñoz (Madrid), B. Cortázar (Gente), F. Marín (TV-Comunicación), R. Maestre (Delegaciones), R. Rey (Diseño), J. Romeu (Fotografía)

DIARIO ABC, S. L. U.

DIRECTOR GENERAL: Víctor Niharra

ABC

Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez

Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lahuente, Joan Maria Gasca

Jefes de Área: Jaime González (Opinión), Alberto Pérez (Nacional), Miguel Salvatierra (Internacional), Mayte Alcaraz (Sociedad-Cultura), Angel Lazo (Economía), Pablo Pileus (Reportajes corresponsal político), Jesús Aparici (Arte)

Adjunto al director: Ramón Pérez-Maura

PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA
PRESIDENTA-EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA

CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA

DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO

Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guajero (Continuación), A. Galdo (Nacional), F. Cortés (Economía), A. Puela (Región), J. Fernández-Oviedo (Sociedad), A. Garrido (Madrid), I. G. Calero (Cultura), E. Ortega (Deportes), F. Álvarez (TV-Comunicación), L. del Álamo (Diseño), J. Renuer (Fotografía), F. Ribón (Ilustración)

Director General: Héctor Casado

Económico-financiero: Iratxe María Oza
Comercial: Emma Mágica
Producción y sistemas: Ignacio Sanz

LA REFORMA EDUCATIVA DEL PSOE

AL poco tiempo de tomar posesión, el Gobierno socialista acudió al Real Decreto para suspender por vía urgente y reglamentaria la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE). Ayer, la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, remató la segunda fase de desmantelamiento de la LOCE y presentó al Consejo Sectorial autonómico las bases definitivas de la reforma educativa, que discurren por los mismos cauces ideológicos que marcaron la suspensión de la ley antes del verano. Se trata, ante todo, de la eliminación formal de un modelo educativo que el PP construyó al cabo de muchos años de debates y reflexiones conjuntas con especialistas, padres y educadores. De hecho, la LOCE fue una de las normas en las que el PP mejor supo plasmar su ideología reformista, dando paso a una Ley ambiciosa y académicamente exigente, reclamada por la comunidad educativa tras constatar el fracaso de la Logse, causante de un sistema caracterizado por el fracaso escolar, el desánimo del profesorado y la mediocridad de la enseñanza.

Sin intento alguno de oposición previo con la oposición, ni debate conocido con el sector, el Gobierno ha presentado una reforma educativa que oscila entre una menor exigencia al alumnado, la obsesión laicista contra la Iglesia Católica y la ausencia de una evaluación realista de los medios materiales disponibles en las Autonomías. Cabría preguntarse si para este viaje hacían falta las alforjas que ayer se expusieron, pues básicamente la reforma se queda en un intento de desvirtuar de manera sutil, pero evidente, la enseñanza de la religión.

No obstante, sí cabe señalar algún efecto práctico que puede acarrear la supresión de la Prueba General de Bachillerato, con lo que se pone otra vez a los alumnos en puertas de la Universidad para que sea ésta, nuevamente, la que establezca un filtro que debía existir antes, al término de la enseñanza Se-

cundaria. Igualmente se ratifica la supresión de itinerarios previstos en tercero y cuarto de la ESO, que debían servir para decantar profesionalmente a los alumnos y que ponían en valor la Formación Profesional, obligando a las familias y a los educadores a una tarea responsable de orientación de los jóvenes en función de sus capacidades y actitudes.

En el orden más ideológico, al que como decíamos va orientada la reforma, la asignatura de Religión Católica no podía perder protagonismo en una iniciativa de este Gobierno socialista, empeñado en la batalla del laicismo. Lo conserva en condiciones de una relativa marginación, pues tendrá un limitado valor académico, insistiendo en una voluntariedad para el alumno que ya existía en la LOCE. Se prevé la enseñanza del hecho religioso «no confesional», que será obligatoria para todos los alumnos de Secundaria, distribuida entre las asignaturas de Geografía, Historia y Filosofía. Además, y en lo que construye uno de esos falaces antagonismos tan en uso en el actual Gobierno para dejar claro su talento, la reforma prevé una asignatura de «Educación para la ciudadanía», también obligatoria, cuya denominación permite preguntarse para qué educan entonces las demás asignaturas, salvo que nos hallemos ante un instrumento de difusión de idearios más que de conocimientos, algo que no sería sorprendente. Queda el capítulo de la financiación de la reforma, especialmente para el desdoblamiento de grupos y la enseñanza reforzada de algunas asignaturas.

El Gobierno popular convivió con la Logse varios años, pese a la demanda unánime para superar su fracaso. Dio tiempo para evaluar sus efectos y definir soluciones. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha dado a la LOCE la misma oportunidad y ha preferido emprender una reforma que vuelve a la educación sin exigencias, proyectando sobre el futuro educativo un horizonte de mediocridad.

MATRÍCULAS AUTONÓMICAS

EXISTE buena sintonía, al parecer, entre el Ministerio del Interior y la Consejería correspondiente de la Generalitat de Cataluña respecto de la introducción de un distintivo autonómico en las matrículas de los automóviles. Renace así un asunto que se había cerrado en su día con motivo de la adaptación al modelo europeo, asumido sin problemas por el sector automovilístico y por los ciudadanos en general. Se trata, pues, de una concesión simbólica del Gobierno socialista al tripartito catalán, que trae causa de la vieja disputa sobre las siglas «CAT» o «GI», que dio mucho que hablar hace tiempo. Al final del proceso, el rótulo provincial —que todavía forma parte del imaginario colectivo— será sustituido por una referencia a la Comunidad Autónoma.

Como de costumbre, la sociedad va por delante

de la burocracia: como es notorio, cada cual utiliza según su preferencia emblemas o signos que identifican, si así lo desea, su lugar de origen o de residencia; conviene otorgar a los símbolos la importancia que merecen. Es comprensible el esfuerzo de las autoridades autonómicas por conseguir el respeto y la utilización de su bandera, de su himno o de su escudo. Pero el Gobierno debería ser igualmente exigente, aunque sólo sea por razón de reciprocidad. ¿Acaso no debe figurar la bandera de España en los Ayuntamientos y demás instituciones en los términos y con la preeminencia que exige la Ley? No fue éste el caso reciente de la Diada. Los nacionalistas deben ser conscientes de que la gran mayoría de los españoles exige que se otorgue la honra que todos debemos a los símbolos comunes.

MENSAJES CRUZADOS

EL vídeo remitido por ETA al diario «Garra» no es, ni por su formato ni por su contenido, una réplica improvisada a la presión del PNV sobre la izquierda abertzale en el discurso parlamentario del plan Ibarretxe. Se trata de una respuesta calculada y meditada, una auténtica advertencia al nacionalismo, aunque sin amenazas, y la única manera que tiene la banda terrorista de procurarle hueco a su decaído frente «político» para poder negociar un acuerdo honroso con el nacionalismo gobernante.

La escenografía del comunicado etarra podría transmitir la imagen de un enfrentamiento de fondo entre ETA y el PNV, pero la discrepancia sigue siendo táctica, ya ni siquiera estratégica, en torno al reparto de cuotas en el frente nacionalista que quedó trabado en los Acuerdos de Estella. En definitiva, el plan del lendakari es la versión legislativa de aquel deshonesto pacto de agosto de 1998 por el que ETA, el PNV y EA se comprometieron a la creación «nacional» de Euskal Herria, que obligaba a ambos partidos a «abandonar todos los acuerdos que tienen con las fuerzas cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria y la construcción de España (PP y PSOE)». Por eso, el PNV no tiene autoridad moral para reprochar a ETA estas incursiones verbales, porque fue su pacto de 1998 el que puso de largo a los terroristas como interlocutores válidos para negociar el futuro del País Vasco.

El guión de Estella se está cumpliendo con la fidelidad que demostró el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, en el Alderdi Eguna —Día del Partido—, a cuyo discurso soberanista ni ETA ni Batasuna son capaces de poner objeción alguna, salvo las que sean necesarias para salvar la precaria situación de la izquierda proetarra. ETA sabe que el plan Ibarretxe no es, como dice en su vídeo, una simple reforma del Estatuto, sino la estrategia para suplantarlo por una norma confederal. También lo sabe Batasuna y, sobre todo, el PNV, que ha puesto a la izquierda abertzale entre la espada y la pared; entre adherirse ahora incondicionalmente, en el Parlamento, a la propuesta soberanista del lendakari o esperar a su desaparición en unas próximas elecciones autonómicas a las que probablemente no podrá concurrir por su vinculación endémica con ETA. Entonces, la apelación al voto nulo podrá no movilizar a tantos militantes abertzales como en las pasadas elecciones locales, si de ello depende una mayoría parlamentaria absoluta y decisiva para aprobar en 2005 un texto que, dejando a un lado su inconstitucionalidad y de su inviabilidad material, implica el ejercicio, al menos teórico, del derecho de autodeterminación. El PNV y ETA conocen sus dependencias recíprocas y juegan con ellas a los mensajes cruzados.

ABC

Director Adjunto: Eulanda San Martín

Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Matute, Fernando E. Labarthe, Juan María Gastaca

Jefes de área: Iñaki González (Opinión), Alberto Pérez (Nacional), Miguel Salazar (Internacional), Maitía Alcaraz (Sociedad-Cultura), Aigel Usio (Economía), Pablo Flores (Reportajes-correspondencia política), Jesús Aycart (Arte)

Adjunto al director: Ramón Pérez-Maura

PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA

PRESIDENTA-EDITORIA: CATALINA LUCA DE TENA

CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA

DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Galano (Continuidad), A. Collado (Nacional), F. Cortés (Economía), A. Pueta (Región), J. Fernández Cuesta (Sociedad), A. Garrido (Madrid), J. G. Calero (Cultura), E. Ortega (Deportes), F. Álvarez (TV-Comunicación), L. del Álamo (Diseño), J. Rotureau (Fotografía), F. Rubio (Ilustración)

Director General: Hector Casado

Económico-financiero: José María Cea Comercial: Laura Muga
Producción y sistemas: Iñaki Sanz

DURO, PERO CIERTO

AL presidente del PNV, Xabier Arzalluz, no le ha gustado que este periódico informara a sus lectores de que el lendakari ponía en manos de ETA el futuro de su plan soberanista. Arzalluz mostró ayer su disgusto con ABC en el discurso del Alderdi Eguna, o Día del Partido, resumiendo probablemente todas las contrariedades que le han producido las publicaciones de los principales documentos de la propuesta soberanista, el texto normativo y el dictamen de los expertos. El malestar de Arzalluz no es preocupante pero sí túa correctamente a su partido ante una realidad incómoda, dura, pero cierta. El PNV y el lendakari sólo cuentan con ETA para dar una salida al plan soberanista. La prueba está en que el plan del lendakari no ha ganado un solo adeptos fuera de las filas nacionalistas y, sin embargo, el nacionalismo sigue adelante con la propuesta. Sólo la expectativa de lograr el aval de la banda terrorista infunde ánimos a la estrategia fracasada del lendakari, quien presentó su plan soberanista ante el Pleno de la Cámara vasca con datos inequívocos en la mano. PP y PSOE rechazan el plan; los sindicatos no nacionalistas, también; y los empresarios han alertado sobre las nefastas consecuencias de la secesión en el desarrollo económico del País Vasco. El último comunicado del Círculo de Empresarios es contundente. Si busca la integración de la sociedad vasca bajo el manto de su propuesta, el lendakari ya sabe que no la va a tener; pero si se empeña en proseguir con el plan, es evidente que únicamente busca asegurar la reunificación del nacionalismo y su hegemonía en el País Vasco. Le guste o no a Arzalluz, este objetivo sólo lo puede alcanzar el PNV con el apoyo de ETA, y lo está buscando afanosamente. El falseamiento de la realidad es imprescindible para disfrazar la propuesta como una oferta democrática, pero como la realidad se impone, la ecuación del chantaje paz por soberanía apareció nitidamente en el preámbulo del discurso del lendakari. La aprobación de la propuesta de libre asociación acabará con

la violencia de ETA, dijo el lendakari. No hacía falta que explicara las razones de tan contundente afirmación. Esta tarea intelectual corrió a cargo de Arnaldo Otegi, quien, en la misma tribuna parlamentaria y consciente de que PNV y ETA se necesitan más que nunca, declaró a la izquierda abertzale vencedora del debate que siempre ha querido ETA: el de condicionar el fin de la violencia al reconocimiento y ejercicio de la autodeterminación. Por eso repetía Otegi ayer en el diario «Gara» que la consulta al pueblo vasco «era la solución del conflicto», descartando además que ETA pusiera obstáculos a una consulta que es la culminación del trueque que la banda terrorista pactó en Lizarrta con el PNV.

Por si al señor Arzalluz le hicieran falta más pruebas de la realidad que se obstina en negar, bastaría recordarle que la mayoría absoluta del Parlamento vasco sólo la alcanzará el nacionalismo gobernante con la suma de los siete votos de Socialistas Abertzales, marca parlamentaria de ETA. Por tanto, la confianza del lendakari en que su plan será aprobado por el Parlamento vasco no es ilusión sino certeza de que la banda terrorista acabará ordenando a Otegi y compañía que voten a favor de la propuesta. Los intereses se cruzan y el nacionalismo gobernante pasará factura por todos estos años de oposición política y judicial a la lucha antiterrorista del Gobierno. Los últimos ingenuos pueden ahora comprender los afanes del Gobierno vasco en impugnar la Ley de Partidos o la disolución de Batasuna como favores a cuenta del envite soberanista que ha tramado el nacionalismo. El tripartito necesita el apoyo de Batasuna tanto como ésta coger el último tren que le ofrece Ibarretxe para garantizarse un mínimo papel en la vida política del País Vasco. El nacionalismo vasco, otra vez por su propio y exclusivo interés, como hiciera en 1998, ha vuelto a lanzarse al rescate de la izquierda proetarra y de ETA, en vez de colaborar con el Estado en el golpe definitivo a la banda terrorista.

SAN SEBASTIÁN: DOBLE FALLO

POR si no era suficiente el escándalo político organizado en torno al estreno de «La pelota vasca», de Julio Medem —que acaso en el fondo haya servido a la estrategia cínicamente propagandística de los organizadores, siempre tan silenciosos con el sufrimiento de las víctimas de la cercana violencia terrorista como ruidosos defensores de compromisos sociales en otros ámbitos del planeta—, el Festival de San Sebastián ha añadido en esta edición un manifiesto fiasco artístico al premiar a una infumable película alemana en detrimento de la brillante y conmovedora «Te doy mis ojos», de la española Iciar Bollain, indiscutible triunfadora ante la opinión del público y la crítica. Un fallo —en el doble sentido— tan evidente que lo ha admitido el propio jurado del certamen, incapaz de encontrar una fórmula reglamentaria para premiar a la cinta española en todos sus merecimientos, tras haber concedido el máximo galardón a sus intérpretes.

Aunque los escándalos por el criterio parcial de los jurados son frecuentes en los festivales de cine, el donostiarra suele manifestarse con reiterada injusticia en este aspecto, en detrimento de su necesario prestigio internacional, largamente porfiado por anteriores responsables tras una patente crisis de una década. El sinsabor de la postergación de la indiscutible «ganadora moral» —según la estupefaciente explicación de uno de los miembros del tribunal— añade barro cinematográfico a la polémica política y social provocada por el tendencioso documental de Medem, acogido en el certamen con indisimulada complacencia pese a su sesgada preterición del colectivo amenazado por la presión etarra. No podía el festival haber elegido un camino más errático que el pisoteo de su propia dignidad artística después de trivializar con regodeo el sufrimiento de una significativa porción de esa sociedad vasca a cuya médula cultural se supone que sirve.

AJUSTE ALEMÁN

EL canciller Schröder se juega su puesto casi cada semana en el Parlamento alemán cuando se someten a votación las disposiciones que reforman (recortan) el generoso Estado del bienestar que los alemanes han construido durante décadas de prosperidad, pero que ahora no se pueden pagar. La puesta en práctica de la Agenda 2010 del canciller, que pretende dotar al Estado de una dimensión que pueda financiarse sin amenazar el potencial de crecimiento de la actual sociedad alemana, obliga a los socialdemócratas a sucesivas renunciaciones de lo que han sido sus banderas tradicionales.

Esta semana Schröder consiguió aprobar en el Bundestag la reforma-recorte de la sanidad pública con los votos de su coalición y con el apoyo de la oposición. Los seis diputados del SDP que rompieron la disciplina del partido dejaron clara la división interna. Cada votación es pues una reválida para la coalición en el Gobierno, que cuenta además con muy baja aceptación en los sondeos: del orden del 30 por ciento de intención de voto frente a casi el 50 de la oposición. Las tres últimas elecciones en los Estados federados han sido claramente adversas a los socialdemócratas, que se han quedado en minoría en la Cámara alta (Bundesrat), lo cual acentúa su debilidad.

De hecho, simultáneamente a la aprobación de la reforma sanitaria, la oposición rechazó en la Cámara alta los Presupuestos, incluida alguna rebaja fiscal, con el argumento de que están mal planteados y necesitan retoques. De manera que Schröder gobierna con el alma en hilo, en minoría en la Cámara alta, y con una mayoría muy precaria (por nueve escaños) en la Cámara baja, amenazada por la indisciplina del ala izquierda socialdemócrata. Esta semana el canciller recordó a sus diputados la crisis de 1982, que acabó con el Gobierno Schmidt y mandó al SPD a la oposición durante 16 años. «Si no queréis las reformas que propongo, buscad a otro», les dijo. Enésima amenaza de dimisión de Schröder cuando apenas ha cumplido un año en el Gobierno tras su inesperada victoria en las elecciones federales. Paso a paso, una vez constatada la amenaza de recesión, Alemania parece despertar del letargo y admite que debe asumir reformas y aceptar sacrificios. No ocurre lo mismo en Francia, que pasa por un momento semejante en cuanto a estancamiento económico, pero donde la sociedad no parece dispuesta a asumir ningún sacrificio. En Alemania se perciben los primeros síntomas de recuperación, que pueden ser determinantes para evitar que la Unión Europea se deslice hacia la recesión.

ABC

Directores Adjuntos: José Luis González-Besada, Eduardo San Martín

Subdirectores: Santiago Castro, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, José Antonio Álvarez-Guindín, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca

Jefes de área: J. González (Opinión), P. Planas (Nacional), M. Salvatierra (Internacional), M. Alcaraz (Sociedad-Cultura), A. Laso (Economía)

Adjuntos al director: I. Sánchez Cámara, R. Pérez-Maura, J. A. Navas

PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA
PRESIDENTE: NEMESIO FERNÁNDEZ-CUESTA
CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA

EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA
DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Gujaro (Continuidad), A. Puerta (Regiones), J. Fernández-Cuesta (Sociedad), A. Garrido (Madrid), J. G. Calero (Cultura), E. Ortega (Deportes), F. Álvarez (TV-Comunicación), I. del Álamo (Diseño), J. Romeu (Fotografía), F. Rubio (Ilustración)

Económico-financiero: José María Cea **Comercial:** Laura Múgica
Publicidad: Jesús Quesada **Producción y sistemas:** Ignacio Sanz

ETA
APUNTA

EN pleno acoso del nacionalismo, el PP y el PSOE han recibido la amenaza directa de ETA, que ha decidido convertir las sedes de populares y socialistas en «objetivo militar». El comunicado etarra se produce justo en el momento en que el Gobierno de Ibarretxe ha concretado sus aspiraciones soberanistas, enmarcadas en un proyecto que estará listo dentro de un año y que plantea la independencia mediante un Estado vasco asociado a España. El programa de máximos del Ejecutivo de Vitoria, la «ofensiva final», obedece, en el fondo, a las mismas razones que han llevado a la banda terrorista a estrechar aún más el cerco sobre los no nacionalistas: la sensación de que pueden ser derrotados. Para Ibarretxe, más preocupado por el soberanismo que por la paz, ETA no es el mayor problema. Su objetivo es afianzar el régimen nacionalista quebrando la convivencia. Se trata, en definitiva, de provocar al Estado para forzarlo a una respuesta extrema que les permita sacar a pasear su victimismo. A estas alturas, resulta obvio que la comunidad de fines entre el nacionalismo y ETA se traduce en objetivos similares. Ambos se necesitan al extremo de que la debilidad de uno repercute gravemente en el otro y, debilitados los dos, la respuesta —desde un punto de vista estratégico—, resulta similar. El PNV plantea la independencia con argumentos no muy distintos a los de Batasuna. Por supuesto, ETA habla de «objetivos militares» y sus amenazas al PP y al PSOE son amenazas de muerte, mientras que el PNV cultiva el ámbito del «desafío político», que no es otra cosa que forzar el desistimiento de los no nacionalistas. Por eso, horas después de que ETA hiciera público su último comunicado, Joseba Egibar afirmaba que si el PP y el PSOE rechazaban el plan de Ibarretxe «lo van a pasar muy mal». Egibar, transparente en su simpatía, resaltó la importancia del «momento», justo ahora que la ofensiva política, judicial y policial tiene a ETA y a su entorno debilitados. El acoso a los no nacionalistas irá en aumento, porque el PNV, ante la previsible ilegalización de Batasuna, se ha visto obligado a mostrar sus cartas antes de tiempo. La estrategia moderada con la que pretendía envolver su proyecto soberanista ha pasado a mejor vida; de lo que se trata ahora es de hacerle un guiño al electorado batasunero y apuntalar el régimen. La unidad del PP y el PSOE molesta al nacionalismo; su fortaleza ante el acoso del que están siendo objeto dificulta las aspiraciones del PNV, obligado por las circunstancias a elevar el ritmo del «desafío político» al que se refería ayer Egibar. En estas condiciones, la lucha será desigual y más difícil que nunca. En inferioridad y en campo contrario, se impone la templanza. A la provocación, mesura. A sus ataques, defensa inteligente.

SCHRÖDER, EL FIN DEL
LIDERAZGO ALEMÁN

ALEMANIA parecía un país destinado al liderazgo. Pero, para ejercer ese poder, no basta con ser el Estado de mayor tamaño y población de Europa. Hay que ser también modelo de responsabilidad y dar ejemplo de que se pueden adoptar decisiones con visión de largo plazo y algo más que instinto de mera supervivencia. Son dos virtudes de las que, por desgracia, el canciller Schröder no ha dado aún prueba alguna tras la populista campaña que le ha dado una victoria hipotecada por irresponsables descalificaciones y promesas a la ligera.

La relajación del Pacto de Estabilidad del euro apenas dos días después de la victoria de Schröder es una mala noticia no ya para la credibilidad del liderazgo alemán, sino para la solidez de la moneda única, que necesita dar prueba de rigor en estos tiempos de incertidumbre. El Pacto de Estabilidad fue una imposición germana para que la divisa europea heredase la sana disciplina del antiguo marco. Es una triste paradoja que Alemania debilite ahora aquel compromiso para darse un pequeño desahogo presupuestario durante un par de años. Es la política del corto plazo; del gasto que puedes y endeuda tu economía, que del futuro no hay que preocuparse. El Pacto de Estabilidad fue concebido para meter en cintura a España y los países del Sur que ingresaban en el euro. Y resulta que hoy es España la que clama casi en solitario por las virtudes del rigor económico, que en nuestro país se traducen en un saludable crecimiento y creación de empleo. Claro que el Pacto de Estabilidad fue creado por Theo Waigel, el ministro de Finanzas del canciller Kohl. Y Kohl, Waigel y aquella generación sí asumía que Alemania no era un país del montón del club europeo.

Schröder rebaja el Pacto de Estabilidad y sale él mismo debilitado de una ajetreteada campaña

electoral. Mal podrá ejercer como uno de los grandes del concierto mundial si una de sus primeras tareas será hacer olvidar al presidente Bush las desafortunadas palabras de su ex ministra de Justicia, Däubler-Gemelín, cuando comparó al jefe de la Casa Blanca con Hitler. No parece muy apropiado que un jefe de Gobierno que aspira a sentarse en la mesa de los más poderosos gane unas elecciones con insultos y descalificaciones contra EE.UU. Ya puede ir olvidando Alemania, por el momento, su deseo de ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Este canciller, atado además a su alianza con el partido de los Verdes —al que aún le queda mucho por madurar—, no parece tampoco el hombre capaz para llevar a cabo las reformas económicas de fondo que necesita Alemania para modernizarse. Cambios que pueden requerir hacer frente a los sindicatos o asumir una estrategia de largo plazo. Realmente, difícil de imaginar.

La merma de liderazgo de Alemania no es buena para España. La relajación del Pacto de Estabilidad puede provocar, a medio plazo, una subida de los tipos de interés que dificulte el control de la inflación y frene el crecimiento. La economía española no puede sentirse cómoda si la europea no se sana. De igual forma, el débil pulso político germano lastrará el deseo de imprimir autoridad a la Política Exterior y de Seguridad de la UE, en la que tan interesado está nuestro país. El previsible retraimiento de la política exterior germana, por ejemplo, puede ser un freno adicional de la Defensa europea. El otro lado de la moneda es que éste es el momento en que España debe mostrar que es un país serio, que defiende una política fiscal, económica e internacional seria, haga lo que haga Alemania. Es el momento de demostrar que el rigor hace de España un lugar muy atractivo para la inversión.

URNAS EN MARRUECOS

DOS días han tardado en hacerse públicos los resultados de las elecciones «transparentes» de Marruecos, unos comicios marcados por una altísima abstención, reveladora de la desconexión entre la sociedad de la nación vecina y su clase dirigente. Los islamistas moderados del PJD han casi triplicado el número de escaños (de 14 a 38), pese a su limitada presencia en unos comicios en los que el gobernante Partido Socialista (45 escaños) se impuso por delante del Istiqlal (43). En medio de un proceso electoral complejo, el resultado satisface plenamente las aspiraciones del Rey Mohamed VI. El auge de los moderados de Justicia y Desarrollo, nada hostil con el Monarca y su entorno, evita un horizonte «a lo argelino», al encumbrar dentro del sistema a un partido islámico domestica-

do que permitirá a Palacio frenar la creciente ofensiva del principal grupo islamista marroquí, Justicia y Benevolencia, que había reclamado el boicot a los comicios.

El incremento del Partido Justicia y Desarrollo hará de dique de contención para apartar el peligro de una «oleada islamista insostenible», razón fundamental por la que el propio PJD decidió no presentarse en todas las circunscripciones. La victoria de los socialistas se enmarca en ese escenario perfectamente previsible que nace de la propia estructura de un sistema que evita el efecto sorpresa, diseñado para que todo se atenga a lo políticamente correcto en un país que no entiende de cambios drásticos y donde todo, hasta el propio proceso electoral, lleva su tiempo.

Camino de ruptura

EL PNV no ha podido contener por más tiempo la impostura de su discurso conciliador y ayer destapó, sin matices ni ambigüedades, que su prioridad es la soberanía. Las campañas de Salburúa han vuelto a ser el escenario de las verdades del nacionalismo, muy lejos de los protocolos que imponen el Parlamento vasco o las reuniones con la oposición o el Gobierno de Madrid. Por algo era el «Alderdi Eguna» o día del partido, ocasión para sincerarse y demostrar que entre Ibarretxe y Arzalluz no hay más diferencia que el volumen de sus extremismos. Si los mensajes lanzados han trazado el camino de la ruptura constitucional, las actitudes de ambos dirigentes constituyen un motivo de grave preocupación por lo que aún puede deparar lo que resta de legislatura. Ibarretxe y Arzalluz formaron un dúo extremista y exaltado, desplegando un lenguaje de masas en el que no faltaron la peligrosa identificación pueblo-partido y las apelaciones a una nación étnica, argumentos de ideologías que han dejado en la historia un ruego de desgracias. Sólo los incautos podían pensar que las cosas iban a ser de otra manera. Los resultados del 13-M no debilitaron al nacionalismo radical, sino que radicalizaron al nacionalismo democrático, en la medida en que le dieron un mayor poder en torno a un programa basado en la autodeterminación. El PNV está justificando los 80.000 votos que recibió de la izquierda proetarra, pero también está aplicando su propio programa de máximos. Por eso, Batasuna no encuentra espacio en el contexto político vasco. El PNV, con el poder institucional en la mano, le ha arrebatado el discurso radical de la autodeterminación, cumpliendo el Pacto de Estella con estricta fidelidad.

Las incógnitas se van despejando. Es evidente que el Gobierno de Ibarretxe va a promover la consulta sobre la autodeterminación y que las agendas de su política y de la actividad del Parlamento vasco van a estar supeditadas a este objetivo. Así sucedió con el debate del pasado viernes sobre pacificación y normalización, anticipo de lo que ayer se oyó en Salburúa. También es evidente que las ofertas de diálogo que hace Ibarretxe son trágicas para el PP y, especialmente, para el PSE, porque, si la autodeterminación es irrenunciable, ¿sobre qué se ha de dialogar? La táctica del PNV es identificar diálogo con respeto a la voluntad de los vascos, eufemismo de la autodeterminación, lo que acabará permitiendo al PNV decir que la culpa del conflicto vuelve a ser de los españolistas, que no quieren dialogar. Al PNV no le importa que este discurso legitime a ETA porque, al final, sus víctimas serán consecuencia de la cerrazón del Gobierno y de su negativa a respetar la decisión de los ciudadanos vascos.

Frente a esta campaña destructiva del nacionalismo, el Gobierno y los partidos autonomistas deben sacar conclusiones. La pri-

mera es que es preciso preservar el Acuerdo por las Libertades y Contra el Terrorismo como la única respuesta constitucionalmente admisible frente a la comunidad de fines entre el nacionalismo y ETA, que se debe denunciar también internacionalmente. A ese acuerdo debería sumarse definitivamente el nacionalismo catalán, liberándose de una insostenible solidaridad con los nacionalistas vascos. La segunda conclusión debe incumbir a los socialistas, en la medida en que los discursos de Ibarretxe y Arzalluz no les dejan el más mínimo resquejido para «tender puentes», los cuales, por la experiencia vivida y la deslealtad patológica del PNV, suelen tener un solo sentido a favor del nacionalismo. Nada pueden compartir los socialistas, salvo que busquen su suicidio político, con un partido cuyo presidente estaría dispuesto a cortarse la mano antes que firmar la Constitución. Por último, el nacionalismo está llevando la situación a términos extremos, anulando cualquier margen para la maniobra política, la transacción entre programas o el acuerdo conciliador. Si el desafío nacionalista persigue la ruptura de la unidad de España, no hay negociación posible y será la Constitución la que marque la respuesta del Estado. Que luego nadie se sorprenda si, ante la disyuntiva que plantea el nacionalismo, el Estado se protege, con todas las formas democráticas, pero también con todos los instrumentos y las consecuencias legales.

Nuevo curso y reforma

LA Universidad española comienza un nuevo curso entre vientos de reforma legislativa y un ambiente no suficientemente sosegado. Lo que casi nadie pone en duda, ni siquiera la mayoría de los socialistas, es el fracaso de la ley actual que aprobó el Gobierno del PSOE apoyándose en su mayoría absoluta en el verano de 1983 y sin alcanzar el menor consenso. Sobre las líneas directrices de la reforma existen notables desacuerdos entre las principales fuerzas políticas, pero no se le puede disputar sin injusticia al Gobierno del PP su voluntad de alcanzar acuerdos y su actitud dialogante y moderada. Tampoco cabe negar que, con independencia de algunos aspectos deficientes y otros discutibles, el sentido general de la reforma es acertado y debe contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza universitaria. De momento, las Cortes, con los votos del PP y de CiU, han rechazado la enmienda a la totalidad y el proyecto alternativo presentado por la oposición socialista. Los aspectos principales en los que se centra el conflicto son el sistema de habilitación del profesorado, el diseño de los órganos de gobierno, el procedimiento de elección de los rectores y el sistema de financiación. Y es normal, dado que las dos principales fuerzas políticas defienden concepciones diferentes acerca de la educación superior, y de ellas se derivan algunos principios y propuestas incompatibles entre sí y sobre las que no resulta fácil encontrar puntos de acercamiento. El conflicto sólo puede ser dirimido mediante el sistema de las mayorías parlamentarias, y éste conduce sin duda a que prospere el proyecto del Gobierno con eventuales retoques y mejoras.

Quizá lo menos afortunado en este comienzo de curso sea el enfrentamiento entre el Gobierno y la mayoría de los rectores, fruto tanto de cierto gremialismo de algunos de éstos como de alguna exhibición de torpeza evitable por parte del Gobierno. No resulta fácil eludir la impresión de que sobre el ánimo de algunos rectores pesa la propuesta del Gobierno que les obliga a la dimisión y a la convocatoria de elecciones en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva ley. Tampoco es cierto que todos los rectores se opongan en general al proyecto del Ejecutivo. La recuperación del ambiente sosegado de diálogo entre las dos partes resulta más recomendable, y la razón que en general asiste al Gobierno no debe ser empañada por la intransigencia o la emisión de ciertas expresiones de prepotencia.

Los rectores, por su parte, tienen razón en su pretensión de ser atendidos, pero tampoco deben olvidar que no es su misión la de establecer el régimen legal que regule la vida de las Universidades. Los canales de comunicación y buenas relaciones deben ser restablecidos. El consenso entre Gobierno y oposición ha de ser lo más intenso posible, pero sin olvidar que la minoría no puede democráticamente pretender imponerse a la mayoría.



PRESIDENTE DE HONOR
GUILLERMO LUCA DE TENA
PRESIDENTE
NEMESIO FERNÁNDEZ-CUESTA
EDITORA
CATALINA LUCA DE TENA
DIRECTOR
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

DIRECTOR ADJUNTO: José Luis González-Besada

SUBDIRECTORES: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, José Antonio Álvarez-Gundín, José Alejandro Vara, Fernando R. Lafuente (Director de ABC Cultural)

JEFES DE REDACCIÓN: V. A. Pérez, A. Puerta, S. Gulljarro (Continuidad), J. González (Opinión), P. Planas (Nacional), M. Salvatierra (Internacional), J. Fernández-Cuesta (Sociedad), J. G. Calero (Cultura), A. Lasso (Economía), E. Ortego (Deportes), J. I. Garzón (Espectáculos), F. Álvarez (TV-Comunicación), A. Garrido (Madrid), L. del Álamo (Diseño), F. Rublo (Ilustración)

ADJUNTOS AL DIRECTOR: Ignacio Sánchez Cámara, Ramón Pérez-Maura, José Antonio Navas

SECCIONES: P. Durán, A. Moreno (Continuidad), A. Martínez (Opinión), A. Collado (Nacional), A. Pérez (Internacional), P. Muñoz (Sociedad), N. Pulido (Cultura), F. Cortés (Economía), J. C. Díez, J. M. Mata (Deportes), G. Muñoz (Madrid), B. Cortázar (Gente), F. Marín (TV-Comunicación), R. Maestre (Delegaciones), R. Rey (Diseño), J. Romeu (Fotografía)

DIARIO ABC, S. L. U.

DIRECTOR GENERAL: Víctor Niharra

ABC

Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez

Subdirectores: Santiago Castiblanco, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando P. Laloente, Juan María Gaztrea

Jefes de Área: Jaime González (Opinión), Alberto Pérez (Nacional), Miguel Salvaterra (Internacional), Maite Alcaraz (Sociedad-Cultura), Ángel Lasa (Economía), Pablo Hueso (Historia-Geografía-Política), Jesús Ayral (Arte)

Adjunto al director: Ramón Pérez-Maura

PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA
PRESIDENTA-EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA
CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA

DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO

Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Gutiérrez (Continuidad), A. Collado (Nacional), F. Celis (Economía), A. Puerta (Historia), J. Fernández-Cuevas (Sociedad), A. Garido (Madrid), J. G. Calero (Cultura), E. Orrego (Deportes), F. Alcaraz (TV-Comunicación), L. del Álamo (Diseño), J. Gómez (Fotografía), F. Irujo (Ilustración)

Director General: Héctor Casado

Económico-financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica
Producción y sistemas: Ignacio Sanz

LA HORA DE LA FIRMEZA

EL lendakari Juan José Ibarretxe dio ayer un paso decisivo en su desafío al Estado tras recibir el auxilio de Socialista Abertzaleak, que le prestó los tres votos que le restaban para que su Plan secesionista alcanzara la mayoría absoluta necesaria en el Parlamento vasco. Se consuma así la pista aportada por los batasunos hace unos días cuando su abstención en la Comisión parlamentaria que estudiaba el texto presagiaba lo que estaba por llegar. Y lo que ha llegado no es otra cosa que la consolidación de lo firmado en Estella hace seis años, cuando el PNV decidió echarse definitivamente al monte del separatismo, ya sin tapujos ni medias palabras, para conformar un frente secesionista para el que no le importó pactar con una sangrienta banda terrorista. Pero con un agravante respecto a ese acuerdo del verano de 1998: por entonces Batasuna era una organización política legal; hoy ya no lo es, sino que está incluida, según el Tribunal Supremo, en el organigrama de una banda terrorista con casi un millar de asesinatos a la espalda. También la Unión Europea la tiene en su lista de organizaciones terroristas, la misma en la que está, por ejemplo, la que encabeza Bin Laden. Conviene no olvidar nunca el marchamo terrorista que cuelga en todas las cancellerías del mundo sobre los nuevos socios del lendakari. Nada le ha importado a Ibarretxe que así sea, más aún, parece que se ha aprovechado de la debilidad política y táctica que presenta el entramado que lidera Otegi —fruto del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo— en los últimos tiempos y de su interés por no quedarse fuera de este juego. Para que no haya dudas sobre quién está detrás de esos tres votos que dieron luz verde al Plan baste con citar la carta de Josu Ternera, prófugo de la Justicia, avalando el «sí» que ayer mostró Otegi para justificar su medido apoyo a la estrategia del PNV. Es decir, ETA hizo público en el mismo Parlamento, con total impunidad, su apoyo al órdago que Ibarretxe ha planteado al Estado de Derecho.

Y más nefastas son aún las ominosas condiciones con las que el nacionalismo vasco afronta este socorro de los batasunos, pues ni siquiera les ha exigido una condena de la violencia. Todo lo contrario, Ibarretxe acepta los votos de los partidarios de ella, pese a su compromiso electoral de 2001 de no contar con los proetarras para gobernar. Aunque desde el aserto del «árbol y las nueces» la sociedad tenía claro que el nacionalismo es refractario a cualquier componente ético que pueda apartarle de sus objetivos, desde ayer ya no hay duda. Los muertos, aunque sean puestos por el socio de conveniencia, son sólo un método para alcanzar el fin.

A partir de ahora el lendakari seguirá administrando sus tiempos. Es probable que ya tenga calculada la fecha en la que enviará su Plan al Congreso de

los Diputados, donde será rechazado. No sería extraño que coincidiese con las vísperas de las elecciones en el País Vasco, a las que se presentaría con otro apunte contable en el terreno de los «propios insoportables» del Estado español. Entretanto quizás se proponga negociar de igual a igual con el Estado, supuesto absolutamente inaceptable y que nunca podría plantearse en la entrevista que mantendrá con Zapatero a principios de año. Por último, el paso siguiente sería plantear la consulta popular sobre la autodeterminación, que por ilegal no contaría con la participación de los constitucionalistas y tendría garantizada la victoria de su tesis.

EL lendakari, no obstante, no ha hecho sino su trabajo, lo que anunció. Lo que no han funcionado son las instituciones del Estado. Primero el Tribunal Constitucional, que rechazó el conflicto de competencias planteado por el Gobierno de Aznar sin entrar en el fondo del asunto; luego el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que no declaró ilegal el acuerdo del Parlamento vasco de llevar a la Cámara el Plan; también el Gobierno socialista, que se ha comprometido a despenalizar la convocatoria de referendos ilegales aprobada en la era Aznar y, por último, el PSE cuya inoportuna «tercera vía» abierta para resolver el «conflicto» quedó ayer en ridículo. Demasiados fallos.

Tan grave es la situación propiciada ayer en la Cámara de Vitoria por el terrorismo parlamentario batasuno que el presidente del Gobierno debe dar ya un paso decidido que ponga coto al tenebroso y complicado panorama que se cierne sobre España y la voluntad soberana de los españoles, que desde una parte del país se les intenta arrebatarse. Con firmeza, pero con cabeza y sin caer en retóricas innecesarias que le puedan dar a Ibarretxe una ventaja electoral a rebufo del victimismo. Inquietante es, sin embargo, la primera reacción del consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, quien afirmó que podría imitarse allí la operación del PNV si el nuevo Estatuto catalán no recoge sus aspiraciones.

El jefe del Ejecutivo ha sido emplazado y debe responder de forma decidida, nunca en el sentido de lo expresado ayer por la vicepresidenta Fernández de la Vega, que poco antes de que el Plan fuese aprobado dijo que «el Gobierno no observa tensiones separatistas». Pues menos mal. España no soporta más un presidente contemplativo que observa, escucha y sonríe. Zapatero no puede dudar en apoyarse en sus únicos socios posibles en esta nefasta querrela separatista, el PP (como principal fuerza de la oposición), el resto de los partidos que no estén dispuestos a que España se descosa y, sobre todo, la inmensa mayoría de los españoles que reclaman a su presidente la defensa del Estado de Derecho y de la soberanía que acordaron concederse en la Constitución de 1978.

«España no soporta más un presidente contemplativo que observa, escucha y sonríe. Zapatero debe apoyarse en sus únicos socios posibles, los partidos y la mayoría de los españoles que no quieren que su país se descosa»

AYUDAR A TIEMPO

«D E momento estamos haciendo muy poco», afirmaba ayer el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, el noruego Jan Egeland, cuando las víctimas mortales del maremoto que asoló hace cinco días el sur de Asia alcanzan (aún de forma provisional) la cifra de 130.000 y millones de personas deambulaban hambrientas hacia ningún sitio en ocho países al haber perdido todo en la catástrofe. El socorro a los damnificados vuelve a fracasar y a poner en evidencia la nula capacidad de la comunidad internacional para poner en marcha un mecanismo de respuesta rápido y eficaz ante estas catástrofes. Pasó en los terremotos de Irán y de Turquía, también devastadores, y ha vuelto a pasar ahora: la ayuda a las víctimas permanece almacenada en los hangares y en los alledaños de los puertos o se duplica de manera innecesaria en lugares ya atendidos.

Cierto es que resulta difícil crear un plan coordinado cuando la destrucción ha sido tan global, y que tampoco es sencillo poner de acuerdo a los ocho Gobiernos de los países afectados, que además cuentan con infraestructuras muy limitadas y lastradas por un subdesarrollo casi endémico. Pero quizás por eso es necesario que desde Naciones Unidas no se dilate más la creación de un instrumento de intervención inmediata, dotado del más alto rango administrativo y presupuestario, que mantenga activos planes y protocolos de intervención que sean capaces de movilizar en horas toda la ayuda necesaria. La dimensión de estas tragedias no admite dilaciones.

Se trata de conseguir que el socorro y la solidaridad internacionales sean efectivos. Millones de personas en todo el mundo (ABC aporta desde hoy su grano de arena en esta tarea a través de una página específica) han respondido con generosidad ante el inmenso drama que dejó la gran ola el pasado domingo. La impericia de la comunidad internacional en el auxilio y su muy deficiente capacidad preventiva harán siempre baldío este esfuerzo solidario y condenarán a nuevos lamentos similares de impotencia cuando la tierra vuelva a mostrarse tan cruel con sus moradores.

Estados Unidos encabeza una coalición de ayuda, a la que España está dispuesta a sumarse, y la UE tiene prevista el próximo 6 de enero una reunión de expertos en el sudeste asiático y, al día siguiente, otra de ministros europeos de Cooperación, en la que se debatirá un plan general de ayuda y reconstrucción en la región afectada por el seísmo. Bien está, pero para muchos quizás ya será demasiado tarde porque, como decíamos al principio, «decenas de miles de personas no pueden esperar tanto».